

XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2015.

Transición Nicaraguense. Programas de ajuste estructural.

Adrian Camilo Cabrera Solarte.

Cita:

Adrian Camilo Cabrera Solarte (2015). *Transición Nicaraguense. Programas de ajuste estructural. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-061/653>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

TRANSICIÓN NICARAGÜENSE: LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL.

Adrian Camilo Cabrera Solarte¹ (UNILA). Correo electrónico:

adrian.camilo1992@gmail.com.

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la transición ocurrida en Nicaragua durante los años noventa, con el inicio del gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y los programas diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

De igual manera indagar, buscamos determinar cuáles fueron los Programas de Ajuste Estructural (PAE) implementados durante este periodo y los impactos socioeconómicos de estos.

De este modo, abordaremos no sólo los programas de ajuste estructural, sino también el contexto nacional - caracterizado por el fin de la Revolución Sandinista e inicio del gobierno de Violeta Chamorro - e internacional - que se distingue de otros períodos por la generalización planetaria del capitalismo y la aplicación de políticas neoliberales - en que fueron ejecutados y los efectos.

Palabras claves: Transición, Nicaragua, Violeta Chamorro, Ajuste Estructural, FMI, BM.

¹ Estudiante de Relaciones Internacionales e Integración, Universidad Federal de Integración (UNILA). Foz do Iguacu-Paraná-Brasil.

Introducción

El 19 de julio de 1979 triunfó en Nicaragua la Revolución Sandinista tras más de 40 años de dictadura Somocista (1936-1979). Poco tiempo después de la victoria, la revolución se tuvo que enfrentar a una guerra contrarrevolucionaria apoyada y financiada por los Estados Unidos (EUA) que tenía como objetivo derrocar al gobierno sandinista (Kinloch, 2006, 335).

De esta manera, a fines de la década de 1980, Nicaragua se encontraba inmersa en una guerra civil y afectada por un bloqueo económico perpetrado por Estados Unidos desde 1985 (Catalán, 2001, 42-44).

Como consecuencia de la guerra y el bloqueo, y en medio de un escenario de crisis económica internacional, el proyecto de transformación promovido por la Revolución Sandinista se tornó difícil de sostener. Los cambios, medidas económicas y sociales aplicadas en un contexto se transformaron adversas; primero con una situación de guerra interna; y segundo por una economía cada vez más deteriorada, redujeron y afectaron la asignación de recursos destinados a la educación, la salud y a los sectores populares en general, ocasionando graves desequilibrios macroeconómicos que llevaron a la economía mixta sandinista al colapso a finales de la década (Vilas, 2004).

El gobierno Sandinista estuvo realizando negociaciones con los EUA y los grupos contrarrevolucionarios a fin de buscar una salida al conflicto bélico (Kruijt, 2009). Como parte de estos acuerdos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) convocó a elecciones el 25 de febrero de 1990, siendo derrotado en las urnas por la Unión Nacional Opositora (UNO), una coalición de varios partidos políticos, encabezada por Violeta Chamorro (Kinloch, 2006, 330-334).

Así, se ponía fin a una revolución de carácter socialista y se iniciaba un proceso de transición encabezado por un gobierno neoliberal, alineado con los EUA. (Catalán, 2001, 44).

Al inicio de la década de los noventa, el nuevo gobierno presidido por la administración de la señora Violeta Barrios de Chamorro, se encontró con una situación macroeconómica de desequilibrios, resultado de políticas económicas inadecuadas, factores externos adversos (Close, 2006, 65-69). El producto interno bruto (PIB) había caído en

forma consecutiva desde 1984, sumando que las reservas internacionales oficiales estaban prácticamente agotadas, las exportaciones habían caído a la mitad de los niveles que tuvieron previo a la década de los ochenta, el país había acumulado una deuda externa de US \$ 10.7 mil millones de dólares, equivalente a 9 veces el producto interno bruto del país y a 40 veces sus exportaciones (Giusto, 2008, 74).

En medio de esta coyuntura, comenzaron aplicarse en el país los denominados Programas de Ajuste Estructural (PAE) con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero de estos esfuerzos, fueron los programas antinflacionarios, los cuales consistían en una serie de medidas económicas, dirigidas a eliminar la inflación generada internamente y a corregir la sobrevaluación del tipo de cambio heredada de la década pasada. Este primer esfuerzo por estabilizar la economía nicaragüense, fue acompañado con el compromiso de aplicar un programa de ajuste estructural *Stand By* de mediano plazo, en el cual se establecieron los compromisos en materia de políticas económicas con los organismos internacionales. Lo que se pretendía con este plan de ajuste estructural a mediano plazo (18 meses), era lograr una economía competitiva basada en el sector privado e insertar a Nicaragua en los mercados mundiales. Después de este primer programa orientado a la apertura liberal y libre mercado (Catalán, 2001, 42). En 1994 Nicaragua establece su segundo programa de estabilización y ajuste estructural, dirigido a alcanzar la estabilización macroeconómica, profundizar el proceso de reforma estructural e intensificar más los esfuerzos para la consecución de la viabilidad externa (Giusto, 2008, 67-78).

La investigación se centra en un trabajo preliminar exploratorio de conclusión de curso enmarcado en el proyecto *“Los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aplicados en Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro y sus impacto en el ámbito rural (1990-1997)”*.

El objetivo de este trabajo es establecer y analizar las políticas macroeconómicas de estabilización y ajuste estructural llevadas a cabo en Nicaragua durante el periodo del gobierno de Violeta Chamorro 1990-1996, y se trata de establecer los impactos sociales y económicos de los mismos.

El texto está organizado en tres partes, además de la introducción. La primera parte pretende explicar el proceso de la transición nicaragüense, del paso del gobierno sandinista

y el inicio del gobierno de Violeta Chamorro. La segunda parte del mismo trata sobre los PAE llevados a cabo por el gobierno Chamorro, estableciendo sus impactos y consecuencias sociales y económicas para Nicaragua. Y por último, la conclusión presenta los resultados de la investigación.

Como material de investigación se ha utilizado diversas fuentes bibliográficas en disponibles en línea, sitios web de los organismos públicos (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua), y entidades supranacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), archivos y bibliotecas digitalizadas (Enrique Bolaños Biblioteca), así como un sinnúmero de publicaciones (revistas, artículos, libros) relacionadas con nuestra temática de estudio, que permiten desarrollar y lograr el objetivo establecido dentro de los parámetros de la investigación. Siendo así, el apartado a presentarse a continuación muestra la transición nicaragüense de 1990.

Hacia la transición, el inicio del gobierno de Violeta Chamorro

Después de la derrota del FSLN en las urnas y el traspaso del gobierno a Violeta Chamorro, se inició un complejo proceso de transición política y económica en todos los órdenes de la vida nacional, caracterizado por un clima de incertidumbre y la existencia de, principalmente con una gran oposición, que exigían el desmantelamiento de las fuerzas armadas sandinistas, la inmediata devolución de las propiedades confiscadas y la privatización de las empresas estatales (Perez-Baltodano, 2003, 648-650).

La coyuntura exigía una solución, con el fin de desactivar la amenaza de una guerra civil y una futura intervención militar por parte de EUA, ante ello, el 27 de febrero de 1990 se conformaron dos equipos negociadores presididos por el jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), general Humberto Ortega, y el ingeniero Antonio Lacayo, en su calidad de Ministro de la Presidencia. Además participaron de Joao Baena Soares, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Elliot Richardson, representante del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), y Jimmy Carter, ex presidente de los EUA, en calidad de observadores internacionales.

Las negociaciones terminan el 27 de marzo del mismo año, con la firma del Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial, conocido como el *Protocolo de Transición*. Dentro los acuerdos más importantes encontramos: el reconocimiento de las elecciones como base para la construcción de la democracia y la paz; seguridad jurídica a los beneficiarios de donaciones estatales de propiedades rurales y urbanas, asignados antes del 25 de febrero de 1990; respeto de los rangos, escalafones y mandos del ejército, incluyendo la permanencia del Humberto Ortega como General en jefe del EPS; reducción significativa del ejército; desmovilización de la Resistencia Nicaragüense (RN) antes del 25 de abril para garantizar el traspaso de gobierno en un clima de paz (Kinloch, 2006, 336).

Así, la RN o *contra* condicionó su desmovilización a la firma de nuevos acuerdos con el gobierno, donde los ex combatientes de la RN recibieron tierras y recursos productivos para asentarse con sus familias, bajo la protección de fuerzas especiales de la ONU. Después de concluida la desmovilización el 27 de junio de 1990, ex miembros de la RN fueron incorporados a la Policía Nacional, y se reconoció a la RN como organización política legal. Al tiempo, el gobierno llegó a un acuerdo con el ejército, con el fin de dar inicio a una rápida reducción de efectivos, por lo que entre 1990 y 1992, el número de efectivos en el ejército se redujo de 86.810 a 21.170 miembros (Cajina, 1996, 293).

El desarme de la *contra* y la drástica reducción del ejército significó solo el inicio del proceso de pacificación y la reinserción de los ex combatientes a la vida civil tuvo graves problemas como: la entrega de ayuda, que dependía de la cooperación externa y los trámites burocráticos se redujeron, ocasionando que muchos de los ex combatientes de la RN retornaran a sus lugares de origen, o se dispersaron por el área rural, invadiendo empresas estatales. Incluso a finales 1990, alrededor de cuatro mil hombres, autodenominados *recontras* se levantaron en armas al norte y centro del país, exigiendo la entrega de títulos agrarios y recursos productivos. (Kinloch, 2006, 337)

Ante el surgimiento de los *recontras*, unos tres mil campesinos sandinistas, se organizaron y conformaron el Movimiento de Auto-defensa Nacional, llamados *recompas*, los cuales presentaron sus reivindicaciones al gobierno.

Igualmente, surgió un tercer grupo El Frente Prudencio Serrano, conocidos como los *revueltos*, por hallarse integrado por ex combatientes de la RN y de EPS.

Así mismo, entre 1990 a 1994, la administración Chamorro suscribió más de 48 acuerdos para lograr la desmovilización, a cambio de ayuda material y la reinserción de los ex combatientes a la vida productiva, favoreciendo unos 24,542 beneficiarios – entre desmovilizados y expatriados -, después de esto, el gobierno no llevo adelante más negociaciones y los nuevos grupos rearmados pasaron a ser perseguidos por el ejército (Kinloch, 2006, 337-338).

Finalmente, con el inicio del gobierno de Chamorro, se puso fin a la economía mixta sandinista y se dio comienzo a una economía de libre mercado. La nueva administración puso en marcha simultáneamente un programa acelerado de liberalización económica, llevando acabo la estrategia de estabilización y reforma estructural, formulada y enmarcada dentro de la visión conceptual del FMI y el BM (Rodríguez, 2002, 663-664). Tema que analizaremos en el siguiente apartado.

Los programas de Ajuste Estructural (PAE)

El Estado nicaragüense se orientó dentro de una perspectiva de modelo neoliberal, que promovía los organismos internacionales del llamado *Consenso de Washington*, el cual pretende que el mercado es el único mecanismo para la asignación justa de recursos, que la justicia social consiste en crear igualdad de oportunidades y la competencia genera justicia en cuanto existe una relación de mercado competitivo y eficiente (Pérez-Baltodano, 2003, 657). Es así, como el gobierno de Violeta Chamorro, inicia la implementación de los denominados PAE.

Con el llamado *Plan Mayorca*, se hicieron esfuerzos a partir de abril de 1990, con el objetivo de contener la inflación a través de una política monetaria restrictiva y la reducción del gasto público. Simultáneamente, se dio comienzo a la liberalización del comercio exterior con la reducción de tarifas de importación y del impuesto selectivo al consumo. Además, se implementó una política cambiaria orientada a unificar la tasa oficial de cambio con el mercado libre a través de devaluaciones semanales y en julio del mismo año, se introdujo una nueva moneda, el *Córdoba oro*, como unidad de cuenta. Las intenciones del plan eran indexar el córdoba oro al dólar, para posteriormente reemplazarlo por el *Córdoba*

nuevo como unidad de cambio, haciendo posible la estabilidad de precios, esto siempre y cuando se dispusiera de suficientes reservas internacionales dentro del régimen de libre convertibilidad y mantener la paridad del córdoba oro con el dólar (Medal, 1993; Catalán, 2001, 44-45; Close, 2006, 189-199).

Las medidas monetarias y fiscales aplicadas no fueron suficientes para estabilizar los precios, la inflación se incrementó y aumentó la circulación del dinero, ocasionando una considerable devaluación de su moneda. Además una economía con precios dolarizados reactivó la espiral de devaluación/inflación, provocando una crisis de liquidez que hizo que la recesión aumentara sin controlar la espiral inflacionaria; en 1990 la inflación se aceleró y alcanzó el 13,490% (ver anexo 1), la recesión continuó con una reducción del PIB del orden de 0,1% y la subutilización laboral alcanzó el 44,6% de la población activa (Acevedo, 1993; Catalán, 2001, 45).

EL fracaso del plan Mayorga se puede explicar, por dos factores fundamentales; el primero, por la escasa reacción del sector empresarial; y segundo, por el atraso en el desembolso de las ayudas prometidas por EUA, al no contarse con los recursos esperados, no fue posible respaldar la estabilización de la tasa de cambio que debería servir de ancla para los precios (Medal, 1993). Como consecuencia las devaluaciones aumentaron la inflación, lo que ocasionó más devaluaciones y las restricciones fiscales y monetarias produjeron más recesión.

A fines de 1990 se implementó el *Plan Lacayo*, por medio del cual se puso fin a la hiperinflación en 1991. En marzo de ese año se devaluó el Córdoba nuevo en un 400%, generando un alza del 300% en los precios, y se introdujo el Córdoba oro reemplazando el Córdoba nuevo como unidad de cambio. Y en abril, el alza de precios fue del 20%, eliminando la inflación en forma abrupta (Catalán, 2001, 45).

Las estrategias del plan consistían en la dolarización de los precios internos y la congelación de la tasa de cambio, y una vez indexada los precios al dólar, se congeló la tasa de cambio a través del establecimiento de la libre convertibilidad córdoba oro/dólar, introduciéndose como medio de cambio el córdoba oro indexado al dólar (Acevedo, 1993; Catalán, 2001, 45-46; Rodríguez, 2002, 667).

En agosto de 1991 se firmó un Acuerdo Stand By con el FMI. Este programa se enfocaba principalmente en la reducción del Estado, especial del ejército, para recordar los

gastos, al igual de incrementar los impuestos selectivos al consumo; simplificar y reducir el impuesto a la renta y mejorar la capacidad administrativa y elevar las reservas internacionales netas (Rodríguez, 2002, 661).

Esta estabilidad cambiaria redujo la inflación, la cual se alcanzó por recursos externos recibidos en 1991, especialmente de los EUA. La ayuda externa total en 1991 fue de US\$ 884,5 millones en donaciones (equivalentes al 51,2% del PIB) y US\$ 604,6 en créditos. El Programa de Estabilización Económica fue respaldado con US\$ 717 millones, los cuales se utilizaron para financiar las importaciones y el déficit fiscal y aumentar las reservas internacionales del país (Giusto, 2008 82-83).

Después de lograda la estabilización de precios en el segundo trimestre de 1991, el gobierno dio por concluida la fase de estabilización y anunció el inicio de la reactivación económica. Esto se fundamentó en la estabilidad de precios y las garantías ofrecidas al sector privado los cuales harían posible un aumento considerable de la inversión privada. No obstante, ello no ocurrió porque se produjo una salida de capitales hacia el extranjero sin haber un incremento en las inversiones (Acevedo, 1993). La salida de capitales se explica por la sobrevaluación del Córdoba oro combinado con la libre convertibilidad y la baja inversión fue el reflejo de los problemas presentes en Nicaragua, como era el tema de la propiedad, el mal estado de la infraestructura y la fragilidad de su estabilización.

El éxito antinflacionario obtenido en 1991 fue opacado por la recesión económica y las consecuencias sociales de las políticas implementadas: la inflación alcanzó niveles mínimos a partir de 1991, el PIB declinó 0,2%, el déficit de la balanza comercial aumento en 70%, el desempleo y subempleo afectó a más del 53% de la población activa (Catalán, 2001). Como consecuencia, creció la desocupación, bajaron los salarios, se deterioraron los servicios de educación y salud aumentaron la extrema pobreza y las tensiones sociales, generándose un proceso de descomposición social.

Además, en 1993 se aprobó la ley de privatización de las empresas estatales, en este periodo se implementó rápidamente la privatización de 351 empresas agrupadas en la Corporación Nacional de Empresas Publicas, CORNAP, que aportaban el 30% del PIB (Rodríguez, 2002, 666-667). Producto de estas medidas el Estado pasó de 290.000 a 107.000 empleados, de los cuales 68.000 eran miembros del ejército y 74.000 eran empleados de la empresas públicas cerradas. Los bancos estatales fueron recapitalizados

con fondos del BM y en la reestructuración de la banca nacional 5.600 empleados perdieron sus puestos de trabajo (Close, 2005, 199-203).

Así, en 1994 se firmó el primer acuerdo ESAF con el objetivo de recuperar la economía, pero tanto el FMI y BM tenía sus ciertas diferencias con el gobierno de Chamorro, habían tres tópicos que presentaban cierta dificultad; (1) el problema de legalización de la asignación de tierras agrícolas y de propiedades urbanas hechas por el Gobierno Sandinista; (2) el problema de los bancos estatales; y (3) el problema de la reducción del sector público (Catalán, 2001, 48-51; Guesto, 2008, 82-86; Rodríguez, 2002, 667). Se encontraba en juego las transformaciones llevadas por la Revolución Sandinista, los cuales contaban con una fuerza política y social fuerte a comparación del gobierno que carecía de una base para llevar adelante las reformas exigidas por los organismos internacionales.

El acuerdo ESAF se concretó en mayo de 1994 con la *Carta de Intenciones* al FMI del Gobierno de Nicaragua y comprendía un periodo de tres años, al tiempo que se había realizado la negociación de un Crédito para la Recuperación Económica con el BM. Haciendo que los donantes bilaterales apoyaran los acuerdos con mayor ayuda y las reservas internacionales aumentaran (Solá, 12-15).

El acuerdo contemplaba que en un periodo de dos años se redujera el sector público en 9.000 trabajadores y la política de crédito estaba orientada a eliminar la financiación otorgada por el Banco Central a los bancos estatales y limitaba el crédito a la Financiera Nacional de Inversión (FNI). El acuerdo seguía la línea de privatización pedía vender el 40% de las acciones de la compañía de telecomunicaciones, TELCOR. Se aconsejaba vender, liquidar o devolver 62 empresas públicas (Rodríguez, 2002, 667-669).

Cuando el FMI desembolsó la primera parte de los acuerdos aprobados, quedó claro que el gobierno no estaba en condiciones de cumplir con las metas establecidas por el Fondo: los ingresos fiscales fueron menores y los gastos mayores de lo planeado, por lo que el déficit fiscal y los préstamos superaron los trechos acordados (ver anexo 2). Si bien, el FMI no suspendió el acuerdo, si cancelo la entrega de fondos, por lo que en 1995 el organismo internacional y el gobierno acuerdan un *Programa de transición o programas puente*, en los años consecutivos, 1995 y 1996, cuyo fin era reducir el crédito público, al tiempo que la mayoría de los donantes bilaterales mantuvieron su apoyo con el objetivo de

no perder los avances obtenidos en estabilidad económica y política. Asimismo, durante este periodo, se da una condonación de deuda con apoyo de diferentes donantes bilaterales, gran parte acreedores comerciales (Catalán, 2001, 50; Close, 209-220).

Por último, en aspectos generales, las reformas implementadas a partir de 1990 tuvieron como el aumento relativo del consumo privado a costo del consumo del sector público. A partir de 1994 la economía nicaragüense ha mostrado un crecimiento económico, colocando fin a un largo periodo de recesión económica, sin dejar de lado, su gran dependencia, especialmente con EUA, que durante este proceso se profundiza aún más, todo con el objetivo de llevar a Nicaragua a inserirse en el sistema mundial del comercio.

Consideraciones finales

Durante el gobierno de Violeta Chamorro, se impulsan políticas orientadas a un cambio en la estructura del sistema económico, sustituyendo la economía mixta y planificada del régimen sandinista por una economía de libre mercado, con el objetivo de corregir los desequilibrios macroeconómicos y hacer posible un crecimiento sostenible, con una lógica de reformas estructurales a través de la liberalización de los mercados de bienes y servicios.

Como consecuencia, el gobierno de Chamorro adoptó una serie de programas de estabilización y ajuste estructural aplicados bajo la supervisión del FMI. Esto llevó a reducir los gastos del Estado, despidos masivos de empleados públicos, reducción del presupuesto para programas de bienestar social y eliminación del subsidio al precio de productos de consumo básico.

Además, con el cumplimiento de los planes de ajuste, el gobierno logró que sus acreedores condonaran la deuda contraída en la década de 1980, por lo que en 1993, la administración Chamorro alcanzó detener la inflación, después de una década de estancamiento y recesión, lo que se reflejó en el crecimiento del 3,2% en 1994 y de una 4% en 1995. No obstante, las metas propuestas tanto por el gobierno y por el FMI se alcanzaron a un costo social alto, principalmente la pérdida de bienestar durante el largo periodo de

recesión. Los PAE obligaron el cierre de muchas instituciones del Estado, lo que se vio reflejado en el recorte del gasto público y en la incapacidad de desarrollar programas para aliviar la pobreza que se encontraba Nicaragua, contribuyendo al deterioro de la distribución del ingreso, así, durante los años noventa, la mitad de la población y tres cuartas partes de la población rural vivían en condiciones de extrema pobreza (Catalán, 2001, 53-56).

Esto significa que los desequilibrios macroeconómicos no se habían resuelto. La mayoría de los desequilibrios fueron financiados por ayuda externa, ocasionando que la estabilización obtenida sea vulnerable y de muy poco crecimiento y sostenibilidad, provocando un agotamiento de las reservas internacionales, resurgiendo también la inflación. Generando que Nicaragua después de implementar los PAE genero una gigantesca dependencia de ayuda externa.

Referencias bibliográficas

- Acevedo Vogl, Adolfo José (1993). *Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional: El pozo sin fondo del Ajuste*. Managua. Latino Editores.
- Andrés Pérez-Baltodano (2003). *Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación: Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua*. Managua. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica – Universidad Centroamericana.
- Catalán Aravena, Oscar. (2001). *Una década de ajuste estructural en Nicaragua*. Encuentro, Año XXXIII, Nro. 59, p. 42-58. Disponible en: <http://www.uca.edu.ni/encuentro/images/stories/2012/pdf/59e/59e3a.pdf> Consultado el 7 de octubre del 2014.
- Close, David (2005). *Los años de Doña Violeta. La historia de la transición política*. Managua. Grupo Editorial.
- Giusto Téllez, José Manuel. *Programa de estabilización y ajuste estructural 1994-1997: impacto en el mercado laboral, la educación y pobreza en la economía*

nicaragüense. FLACSO, Sede Guatemala, 2008.

- Medal Mendieta, J.L. (1993). *Nicaragua: Políticas de Estabilización y Ajuste, su interrelación con la estrategia de desarrollado*. Managua, Multi-Print.
- Kruijt, Dirk (2009). *Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica*. Guatemala, F&G Editores.
- Roberto J. Cajina (1996). *Transición política y reconversión militar en Nicaragua 1990-1995*. Managua. CRIES.
- Rodríguez Alas, Tomas Ernesto. *Ajuste estructural y desarrollo rural en Nicaragua*. Cuadernos de investigación Nro. 16, 2013. IID, Instituto de Investigación y Desarrollo Nitiplan, UCA, Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 653-681 Disponible en la web: <http://www.nitlapan.org.ni/site/es/publicaciones/cuadernos-investigacion/file/62-ajuste-estructural-y-desarrollo-rural-en-nicaragua.html?start=20>. Consultado el 7 de octubre del 2014.
- Solá, Roser (2007). *Un siglo y medio de la economía nicaragüense: las raíces del presente*, Managua: IHNCA-UCA.
- Tijeriano, Frances Kinloch (2006). *Historia de Nicaragua*. Managua. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, UCA, Universidad Centroamericana.
- Vilas, Carlos M (2004), *El legado de la Revolución Sandinista*. Managua. Lea Grupo Editorial.

Anexo 1.

Indicadores económicos de Nicaragua durante 1990-1996.

<i>Sector Interno</i>	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>Crecimiento del PIB en %</i>	-0,2	0,4	-0,4	3,3	4,3	4,7	5,1
<i>Inflación</i>	13,490	866	3,5	19,5	14,4	11,1	12,1
<i>Sector externo, en millones de US\$</i>							
<i>Exportaciones</i>	392	350	309	356	476	647	805
<i>Importaciones</i>	682	843	919	831	953	1,114	1,299
<i>Balanza Comercial</i>	-290	-492	-610	-475	-477	-468	-494
<i>Deuda Externa Pública (en % del PIB)</i>	593,1	585,4	609,5	638,4	543,1	308,9	296,7

Fuente: Oscar Catalán, 2001. Elaboración propia.

Anexo 2

Brechas y ayuda, en % del PIB

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>Déficit Fiscal</i>	20	8	8	7	10	9	8
<i>Déficit Comercial</i>	18	30	33	26	26	23	24
<i>Ayuda</i>	37	69	38	23	36	35	34

Fuente: Oscar Catalán, 2001. Elaboración propia.